

# Trabajo Fin de Grado

Sobre algunos aspectos procesales en el caso  
«independencia de Cataluña».

Autor

Jorge Cortillas Liesa

Director

Regina Garcimartín Montero

Facultad de Derecho, Universidad de Zaragoza.

Año 2018

## ÍNDICE TRABAJO DE FIN DE GRADO

### Abreviaturas.

- I. Introducción.
  - 1. Cuestión tratada en el Trabajo Fin de Grado.
  - 2. Razón de la elección del tema e interés propio.
  - 3. Metodología seguida en el desarrollo del trabajo.
- II. Conflicto de competencia en el delito de sedición respecto al auto de 11 octubre, JCI (núm.3).
- III. Prisión provisional.
  - 1. Valoración de la procedencia del *fumus boni iuris* y del *periculum in mora* en el auto de 16 octubre JCI (núm.3).
  - 2. Valoración de la procedencia del *fumus boni iuris* y del *periculum in mora* en el auto de 9 noviembre 2017, TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª).
  - 3. El encaje de la prisión provisional en el ordenamiento jurídico español.
- IV. Acumulación de procesos.
  - 1. La problemática de la acumulación de procesos entre aforados y no aforados (conexión material inescindible) en el auto 24 noviembre 2017, Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª).
- V. Conclusión.
- VI. Bibliografía.
  - 1. Libro consultados.
  - 2. Revistas y artículos jurídicos.
  - 3. Legislación.
  - 4. Jurisprudencia.
  - 5. Recursos de Internet.

## ABREVIATURAS

- **AJCI:** Auto de Juzgado Central de Instrucción.
- **AN:** Audiencia Nacional.
- **ATS:** Auto del Tribunal Supremo.
- **CE:** Constitución Española.
- **CEDH:** Convenio Europeo de Derechos Humanos.
- **CP:** Código Penal.
- **FJ:** Fundamento Jurídico
- **JCI:** Juzgado Central de Instrucción.
- **LECRIM:** Ley de Enjuiciamiento Criminal.
- **LOPJ:** Ley Orgánica del Poder Judicial.
- **STC:** Sentencia del Tribunal Constitucional.
- **STEDH:** Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- **TC:** Tribunal Constitucional.
- **TS:** Tribunal Supremo.

## **I. Introducción**

### **1. Cuestión tratada**

De toda la polémica surgida a raíz del denominado *procès* catalán y con la entrada en prisión provisional por parte tanto de Jordi Cruixat y Jordi Sanchez (conocidos como los Jordis) y algunos de los miembros del parlamento catalán he decidido centrarme en algunas de cuestiones que más polémica ha generado desde la base del derecho procesal penal dado la imposibilidad de abarcar todo el proceso penal que se está llevando a cabo todavía hoy.

La primera cuestión analizada será la determinación de la competencia que se atribuye la AN y el JCI para conocer tanto los delitos de rebelión como los de sedición. Esta cuestión ha suscitado dudas por parte de numerosos juristas y he considerado jurídicamente relevante pues determinar si es competente la AN constituye un derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la CE.

En segundo lugar, he considerado la parte más importante del trabajo de fin de grado la valoración de la procedencia de la prisión provisional respecto al auto de 16 octubre del JCI y el auto de 9 noviembre 2017 del TS, pues la encarcelación tanto de los Jordis como de algunos diputados del parlamento de Cataluña ha sido considerado jurídica y políticamente relevante por la sociedad española. De todos es sabido que la procedencia de la prisión provisional tanto de los Jordis como de diputados del parlamento catalán ha suscitado numerosos actos y manifestaciones en toda Cataluña y resto de España.

En tercer y último lugar he considerado relevante la acumulación de procesos que llevo a cabo el TS en el auto de auto 24 noviembre 2017, pues parece interesante esclarecer la diferencia en este proceso entre personas aforadas y no aforadas.

## **2. Razón de la elección del tema e interés propio**

En este caso la razón de la elección del tema no es algo que conlleve una gran dificultad, a lo largo de estos últimos meses España se está viendo afectada por la que sea posiblemente la mayor crisis política en lo que llevamos de democracia, reflejándose también en el factor económico, habiéndose pronunciado personalidades importantes de todo el ámbito internacional, todo el pueblo español está clavando su mirada en Cataluña expectante por lo que pueda pasar.

Tampoco hay que olvidar la relevancia jurídica que tiene este conflicto, pues se están alegando delitos muy poco activos en nuestro ordenamiento jurídico, además de ser de los más ambiguos y difíciles de definir de nuestro CP como son el delito de rebelión y el de sedición.

Como consecuencia de este conflicto se puede apreciar la división de la sociedad catalana en independentistas y no independentistas como se demuestran en las apretadas elecciones del pasado 21 de diciembre de 2017, también se puede notar una tensión entre el Estado español y la comunidad autónoma de Cataluña. La repercusión de esta crisis también se ha notado en el sector económico.

Tampoco hay que olvidar las agresiones que tuvieron lugar en toda Cataluña a raíz del *referéndum* del 1 de octubre de 2017 ya que se han abierto causas por agresiones policiales, además de que este hecho ha traspasado nuestras fronteras repercutiendo en el ámbito internacional.

En síntesis, podríamos decir que el conflicto catalán abarca una enorme complejidad y profundidad en la que considero necesario que se deben esclarecer algunos ámbitos polémicos que se están tratando tanto en los medios de comunicación como en la sociedad en general.

## **3. Metodología seguida en el desarrollo del trabajo**

Una vez elegido el tema, comencé a recopilar información que me pudiera aportar información a la hora de redactar el trabajo, debido a que este trabajo de fin de grado trata un tema de importante actualidad, y por ello todavía no existen obras de gran relevancia lo que dificulta la recopilación de la información. Sin embargo, existen

grandes cantidades de manuales de derecho tanto procesal penal como de penal que poseen información sobre aspectos principales de este trabajo de fin de grado como la prisión provisional y la calificación de delitos de rebelión y de sedición.

Una vez recopilada toda la información que me pudiera ser relevante en este trabajo comencé a analizarla, pues alguna de la información encontrada era demasiado antigua para la aplicación de este trabajo pues algunas de nuestras leyes como el LECRIM como el CP se han ido reformando con el paso del tiempo.

Por último, una vez evaluada la información y teniendo en cuenta la estructura que quería seguir en este trabajo de fin de grado, comencé a redactar dicho trabajo con la esperanza de poder esclarecer más sobre los temas más polémicos que se han dado durante estos últimos meses.

El primer auto que analizo (auto de 11 octubre, JCI núm.3) trata sobre la atribución de la competencia para conocer el delito de sedición por el que se investigan a Jordi Cruixat y a Jordi Sanchez, argumentando que son competencia de la Audiencia Nacional los delitos de sedición que además de atentar contra los bienes jurídicamente protegidos que le son propios, puedan suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno.

El segundo auto a analizar es auto de 16 octubre JCI núm.3, en él se dice que procede la prisión provisional debido a la existencia de indicios de comisión del delito de sedición por parte de los directivos de las asociaciones «Asamblea Nacional Catalana» y «Òmnium Cultural» por organizar las movilizaciones del 20 y 21 de septiembre para impedir que se llevara a cabo la operación contra la organización del *referéndum* de autodeterminación.

El tercer auto analizado es el auto de 9 noviembre 2017 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Sección 1ª y trata sobre la procedencia de la medida cautelar de la prisión provisional por parte de algunos diputados del parlamento catalán por la presencia de indicios de la comisión del delito de rebelión por, primero, votar y aprobar un *referéndum* vinculante sobre la independencia de Cataluña, y, segundo, abordar un proceso constituyente.

Y por último, he analizado el auto 24 noviembre de 2017 de la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Sección 1ª donde se reclama del Juzgado Central de Instrucción

núm. 3 que se acumulen los procesos de los Jordis y de los diputados del parlamento catalán y que el propio TS sea el competente para conocer este único proceso.

## **II. Conflicto de competencia en el delito de sedición respecto al auto de 11 octubre, JCI (núm.3).**

En estos últimos años poca doctrina se ha manifestado sobre la competencia judicial para el conocer los delitos de sedición y de rebelión. Esto es, probablemente por el escaso interés que estos tipos delictivos tienen, pues a lo largo de la historia española pocas veces se han dado. Sin embargo durante estos últimos meses, en concreto, los meses de septiembre y octubre de 2017 la curiosidad por estos delitos se ha incrementado. Todo ello es debido a que los días 20 y 21 de septiembre de 2017 se dieron una serie de altercados en la consejería de Economía de la Generalidad.

Es por ello que, el 27 de septiembre de 2017 se abrieron diligencias previas por un delito de sedición debido a estos altercados. Pues bien, el problema surge cuando en el artículo 65 de la LOPJ dedicado a las competencias atribuibles a la AN no específica en ninguno de sus apartados que la AN sea competente para conocer de los delitos contra el orden público, como son sedición, atentados contra la autoridad, sus agentes y los funcionarios públicos, maltrato a Fuerza Armada, resistencia y desobediencia desórdenes públicos, tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos y delitos de terrorismo, en general ni el delito de sedición en particular.

Ante esta problemática el JCI interpretó que el delito de sedición tenía naturaleza de un delito «contra la forma de gobierno» y así atribuirse la competencia a tenor del artículo 65.1 a) de la LOPJ.

«No todos los delitos de sedición son competencia de la Audiencia Nacional, sino únicamente aquellos que, además de atentar contra los bienes jurídicamente protegidos que le son propios, puedan suponer al mismo tiempo una ofensa contra la forma de gobierno. Dicho en otros términos, la descripción típica del delito de sedición en el Código Penal Vigente atentarán contra la forma de gobierno si los actos se ejecutan con el propósito de cambiar ilegalmente la organización del Estado.» (Auto de 11 de octubre 2017, Juzgado Central de Instrucción núm. 3, FJ 2º).

Esto ha sido criticado por DOPINCO GOMEZ-ALLER argumentando que la AN no es competente para conocer este tipo de delitos ya que el bien jurídico protegido de este delito es el orden público, entendiéndose este como el normal funcionamiento de las instituciones, indistintamente si el objetivo final de dicho delito sea atentar contra la forma de gobierno.

DOPINCO GOMEZ-ALLER ejemplifica este argumento diciendo que «afirmar que un homicidio es un delito contra la vida, pero que si se mata para robar, el homicidio pasa a ser también delito contra el patrimonio»<sup>1</sup>.

De la misma manera trata de ejemplificarlo QUERALT JIMÉNEZ exponiendo que «si alguien quiere matar al Rey —el magnicidio es competencia del citado tribunal central—, no sería su competencia, si la intención del regicida era casarse con la viuda, es decir, el objetivo del delincuente no era político, sino sentimental»<sup>2</sup>.

Esta problemática surge con la reforma del CP del año 1995 donde la rúbrica «contra la forma de gobierno» desaparece del código por lo tanto: ¿los delitos «contra la forma de gobierno» han sido derogados y por consiguiente parte del artículo 65.1 a) ha quedado sin contenido o ha sido sustituido por otros delitos? Para ello debemos remontarnos al CP que estaba vigente en el momento que el legislador publicó la LOPJ es decir, el CP del año 1973 en dicho código entonces vigente sí se encontraban los delitos «contra la forma de gobierno», concretamente en capítulo primero de título II del Libro II del CP más en específico en los artículos 163 y 164 del derogado CP.

El artículo 163 castigaba a «el que ejecutare actos directamente encaminados a sustituir por otro el Gobierno de la Nación, a cambiar ilegalmente la organización del Estado o a despojar en todo o en parte al Jefe del Estado de sus prerrogativas y facultades».

Y el art. 164 castigaba a: «1.º Los que en las manifestaciones o reuniones públicas o en sitios de numerosa concurrencia dieran vivas u otros gritos que provocaren aclamaciones directamente encaminadas a la realización de cualquiera de

---

<sup>1</sup> DOPINCO GÓMEZ-ALLER, J., « ¿Es competente la Audiencia Nacional para conocer de los delitos de rebelión y de (algunos de) los delitos de sedición? », Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, N.º.19-17, 2017, p. 5.

<sup>2</sup> QUERALT JIMÉNEZ, J. J. «Els Jordis i la independència judicial», [https://www.elnacional.cat/ca/opinio/joan-queralt-cuixart-sanchez-independencia-judicial\\_203364\\_102.html](https://www.elnacional.cat/ca/opinio/joan-queralt-cuixart-sanchez-independencia-judicial_203364_102.html), 19 de octubre de 2017; [Consultado el día 31 de enero de 2018].



los fines determinados en el artículo anterior . 2.º Los que en dichas reuniones y sitios pronunciaren discursos, leyeren o repartieren impresos o llevaran lemas o banderas que provocaren directamente a la realización de los fines mencionados en el artículo anterior».

Otros tipos delictivos que compartían rubrica como los delitos «contra el Jefe de Estado, su consorte y su sucesor» y los delitos «contra los altos organismos de la Nación» sí han sido sustituidos, pues ahora son los delitos «contra la corona», y delitos «contra las instituciones del Estado y la división de poderes» respectivamente.

Sin embargo, los artículos 163 y 163 del CP de 1973 han sido derogados, pues en el CP actual no se encuentran tipos penales similares que se puedan comparar con estos derogados delitos.

«En el ordenamiento español se dejan de criminalizar conductas por el simple hecho de estar encaminadas a relevar el Gobierno (portar banderas, repartir impresos, dar vivas), sino por la forma en que pretenden hacerlo (y se escoge un concreto medio comisivo: el alzamiento violento)»<sup>3</sup>.

Hay que tener en cuenta que el delito de sedición no se encontraba en esta rúbrica sino que se encontraba en el capítulo cuarto de dicho título y del mismo libro por lo que no se podría considerar como un delito contra la forma de gobierno. Además el legislador «optó expresamente por seleccionar sólo el Capítulo I, dejando fuera la rebelión (Cap. III) y la sedición (Cap. IV). Sería absurdo pretender que la Ley se remitió sólo al Capítulo I, mencionándolo por su rúbrica completa, pero que en realidad quería remitirse a los Capítulo III y IV»<sup>4</sup>.

Por último es necesario hacer mención a que la AN ya se manifestó sobre esto en 2008, en el auto de auto de 2 de diciembre de 2008 del JCI número 5 donde dice que «el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional» y además entiende que «La comparación de la dicción del artículo 65 1º a) de la LOPJ con la rúbrica del capítulo I del Título II del Libro II del CP vigente en la fecha de su entrada en vigor, conduce a la conclusión de que son esos delitos los que el legislador quiso que

---

<sup>3</sup> DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., « ¿Es competente la Audiencia Nacional para conocer de los delitos de rebelión y de (algunos de) los delitos de sedición? », Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, Nº.19-17, 2017, p. 9.

<sup>4</sup>Op. cit p. 6.

fuera competencia de la Audiencia Nacional y no otros [...] y en la actualidad ocurre lo mismo [...] los antiguos artículos 163 y 164 –delitos contra la forma de gobierno– no tienen equivalente en la actual legislación que resuelve los problemas concursales existentes en la legislación anterior eliminando esos delitos». (Auto de 2 de diciembre 2008, Juzgado Central de Instrucción núm. 5, FJ 4º).

### III. Prisión provisional

#### 1. Valoración de la procedencia del *fumus boni iuris* y del *periculum in mora* en el auto de 16 octubre JCI (núm.3).

El pasado día 20 de septiembre de 2017 el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ordena el registro de la consejería de economía de la Generalidad, debido a este suceso se produjeron varios altercados y destrozos que dificultaron las órdenes de la comisión judicial de registro y, posteriormente, la salida de la consejería debido a la cantidad de gente que se encontraba en el exterior.

Por estos altercados, como ya hemos comentado anteriormente, se están investigando a Jordi Cruixat y a Jordi Sánchez por delitos de sedición. Y por ello, el JCI decidió acordar su entrada en prisión provisional mediante el auto de 16 octubre 2017.

En el auto de 16 octubre 2017, el JCI considera que procede el *fumus boni iuris* debido a que se prueba uno de los requisitos principales de este principio como es la «existencia de un hecho que presente los caracteres del delito [...] como es el delito de sedición». (Auto de 16 octubre 2017, Juzgado Central de Instrucción núm.3, FJ 3º). Otro requisito significativo es que el delito precitado debe superar los dos años de prisión, en el auto se está hablando de penas por valor de 10 años de prisión por lo que supera sobradamente el mínimo de años requerido. Además el AJCI considera que se cumple el tercer requisito para la aplicación del *fumus boni iuris* que es la existencia de «motivos bastantes para estimar criminalmente responsable a la persona contra la que se vaya a dictar la prisión provisional». (Auto de 16 octubre 2017, Juzgado Central de Instrucción núm.3, FJ 3º).

Sin embargo, considero que el JCI se equivoca en la interpretación de los hechos dado que en el delito de sedición existe un elemento del tipo un tanto polémico como es el alzamiento público y tumultuario entendiéndose este, al igual que en el delito de rebelión, como «un alzamiento empleando la violencia de un modo abierto y alterando la normalidad y tranquilidad ciudadana»<sup>5</sup>.

El AJCI justifica dicho alzamiento público y tumultuario de esta manera:

«Los hechos acaecidos los días 20 y 21 de septiembre no constituyen una protesta aislada, casual o convocada pacíficamente en desacuerdo con unas actuaciones policiales llevadas a cabo por orden de un juzgado de instrucción. Por el contrario, las actividades descritas se enmarcan dentro de una compleja estrategia con la que desde hace tiempo vienen colaborando los investigados Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, en ejecución de la hoja de ruta diseñada para llegar a obtener la independencia de Cataluña». (Auto de 16 octubre 2017, Juzgado Central de Instrucción núm.3, FJ 3º).

En este aspecto NIEVA FENOLL ha argumentado que el AJCI «cambia la valoración de sucesos que, observados muy fríamente, no son ni tan graves ni desde luego insólitos, es el hecho de estar relacionados con la movilización para la consecución de la independencia de Cataluña»<sup>6</sup> poniendo el argumento del JCI en jaque ya que dicho acto puede quedar presuntamente en una acción calificativa de desorden público y, de esta manera, no contemplar «el carácter tumultuario que debe tener el alzamiento ya que esta indica cierta desorganización o espontaneidad»<sup>7</sup> y dando «su aplicación, en exclusiva, a supuestos de la máxima gravedad»<sup>8</sup>. Por lo tanto, no es justificable que se dé dicho delito, pues el hecho de que el fin de los hechos sea un acto ilícito o inconstitucional no es argumento para agravar el delito de desorden público a un delito de sedición, pues debemos recordar que la CE no contempla una democracia militante y por ello «tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional cuantas ideas quieran defenderse». (STC 42/2014, de 25 de marzo de 2014, FJ 4º).

<sup>5</sup> MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal. Parte especial 21ª ed. Tirant lo Blanch, 2017, p. 681.

<sup>6</sup> NIEVA FENOLL, J. «Prision Provisional y Contexto Histórico.», <http://agendapublica.elperiodico.com/prision-provisional-contexto-historico> [Consultado el día 24 de enero de 2018].

<sup>7</sup> BOLDOVA PASAMAR, M A ... [et al.]. Derecho penal. Parte especial: conforme a las leyes orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo, Comares, 2016 p. 794.

<sup>8</sup> Op. cit p.794.

El JCI también considera que procede el presupuesto *periculum in mora* entendiendo que existen riesgos que se corren durante la pendencia del proceso. En el caso de la prisión provisional se encuentran recogidos en el artículo 503 de la LECRIM y son tres:

El primero se trata del riesgo de fuga, este riesgo es considerado por DE LA OLIVA SANTOS como la principal finalidad que tiene la prisión provisional.<sup>9</sup>

El segundo ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba, GUTIERREZ DE CABIDIES<sup>10</sup> es crítico con esta finalidad pues considera que existen otros medios menos coercitivos orientados al aseguramiento como por ejemplo el decomiso o intervención cautelar de determinadas pruebas o bien con la práctica anticipada de la prueba.

Y por último, el riesgo de reiteración delictiva, este criterio es el más reciente, surgió a raíz de la reforma procesal penal de 2003, y el legislador procesal dio un carácter demasiado genérico a dicho riesgo pues ahora se abre el debate de si la reiteración delictiva debe ser de la misma naturaleza que la que se procesa al investigado o por el contrario basta con que exista riesgo de reiteración delictiva que abarque todos los delitos del vigente CP. GUTIERREZ DE CABIDIES opina que «debería exigirse que tal actuación delictiva de la que predica el riesgo sea de la misma naturaleza que el delito o los delitos anteriores»<sup>11</sup>.

Sin embargo, no es necesario ampararse en los tres riesgos, la mera existencia de uno de ellos basta para decretar prisión provisional. Además estos riesgos se deben regir por un criterio evaluador atendiendo a las circunstancias del hecho y la gravedad de los delitos.

El AJCI se argumenta que existen los tres riesgos posibles:

<sup>9</sup> DE LA OLIVA SANTOS, A ... [et al.] Derecho procesal penal, 8ª ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 2007 p.406.

<sup>10</sup> GUTIÉRREZ DE CABIDIES, P La prisión provisional (a partir de las leyes 13/2003, de 24 de octubre y 15/2003, de 25 de noviembre, Aranzadi, 2004 p. 76-81.

<sup>11</sup> Op. cit p. 167.

- El riesgo de fuga lo argumenta en la «especial importancia el papel que los dos investigados tuvieron en los hechos objeto del presente procedimiento participando activamente en la convocatoria de las concentraciones que tuvieron lugar los días 20 y 21 de septiembre, alzándose además como sus principales promotores y directores, manteniéndose al frente de las mismas todo el día». Igualmente, el auto argumenta que «es destacable para la evaluación del riesgo de fuga, la relevancia de la gravedad del delito y de las penas que lleva aparejadas, teniendo en cuenta que, a mayor gravedad de los hechos y de pena, más intensa cabe presumir la intención de huida». (Auto de 16 octubre 2017, Juzgado Central de Instrucción núm.3, FJ 4º).
- En el caso de la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba el JCI lo argumenta de la siguiente manera: «se aprecia la alta posibilidad de que los dos investigados puedan proceder a ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba, como se pone de manifiesto a través de la realización de actividades semejantes a las que han motivado su investigación en esta causa; dificultando e impidiendo las medidas de investigación, registro y detenciones que habían sido acordadas, lo que pueden fácilmente reiterar en relación a otras semejantes que pudieran ser acordadas en el curso de la investigación». (Auto de 16 octubre 2017, Juzgado Central de Instrucción núm.3, FJ 4º).
- Y, por último el tribunal justifica la existencia del riesgo de reiteración delictiva «ya que los investigados vienen operando dentro de un grupo organizado de personas, llevando a cabo de forma continua y reiterada actividades de colaboración activa y necesaria en relación con la actuación de personas, organizaciones y movimientos dirigida a lograr fuera de las vías legales la independencia de Cataluña». (Auto de 16 octubre 2017, Juzgado Central de Instrucción núm.3, FJ 4º).

Sin embargo, la procedencia tanto del riesgo de fuga como de la reiteración delictiva y la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba también ha sido criticada.

Frente a la amenaza riesgo de fuga NIEVA FENOLL considera «que esa amenaza de prisión ya existía desde que se iniciaron las investigaciones hace más de veinte días, es dudoso que tal riesgo concorra aún en quien no ha eludido la acción de la justicia durante ese extenso período y, de hecho, ha comparecido voluntariamente»<sup>12</sup>. Además FERRAJOLI contradice la lógica del AJCI diciendo que «el riesgo de fuga esta provocado predominantemente, más que por el temor a la pena, por el miedo a la prisión preventiva. Si el imputado no estuviera ante esta perspectiva tendría, por el contrario, al menos hasta la víspera de la condena, el máximo interés en no escapar y defenderse.»<sup>13</sup>.

Frente al riesgo de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba es el caso que más posibilidades tiene de que se dé, sin embargo «teniendo en cuenta las varias investigaciones judiciales ya abiertas desde hace tiempo por el proceso de independencia de Cataluña»<sup>14</sup> «las diligencias judiciales se incoan el 27 de septiembre y es impensable de qué manera podrían destruirse pruebas de una incitación pública ya producida»<sup>15</sup>.

Y por último la amenaza del riesgo de reiteración delictiva el tribunal lo justifica en que el liderazgo por parte de los imputados de organizaciones destinadas a conseguir fuera de las vías legales la independencia de Cataluña, sin embargo, dichas organizaciones «no dependen de ellos: su rápida sustitución por otros activistas ha evidenciado su fungibilidad»<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> NIEVA FENOLL, J. «Prision Provisional y Contexto Histórico.», <http://agendapublica.elperiodico.com/prision-provisional-contexto-historico> [Consultado el día 24 de enero de 2018].

<sup>13</sup> FERRAJOLI, L. Derecho y razón: teoría del garantismo penal, 8ª ed. Trotta, 2006 p 558-559.

<sup>14</sup> NIEVA FENOLL, J. «Prision Provisional y Contexto Histórico.», <http://agendapublica.elperiodico.com/prision-provisional-contexto-historico> [Consultado el día 24 de enero de 2018].

<sup>15</sup> LLABRÉS FUSTER, A., «Retorçar el Dret», [https://www.arabalears.cat/opinio/Retorcar-Dret\\_0\\_1895210670.html](https://www.arabalears.cat/opinio/Retorcar-Dret_0_1895210670.html), 27 de octubre de 2017; [Consultado el día 1 de marzo de 2018].

<sup>16</sup> Op. cit

**2. Valoración de la procedencia del *fumus boni iuris* y del *periculum in mora* en el auto de 9 noviembre 2017, TS (Sala de lo Penal, Sección 1ª).**

El hecho de que algunos diputados del parlamento catalán hayan sido encarcelados provisionalmente también ha sido un tanto polémico. En concreto con la prisión provisional eludible mediante prestación de fianza de 150.000€, de D<sup>a</sup> María del Carme Forcadell Lluís.

En el ATS se argumenta que procede el *fumus boni iuris* debido a «una fundada sospecha de participación del encausado en una determina infracción penal o en unos hechos aparentemente delictivos». (Auto de 9 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 1º).

En este caso tanto la Fiscalía como el TS argumentan que los hechos aparentemente delictivos pueden ser calificativos de un delito de rebelión recogido en el artículo 472 6º del CP el cual se exige un alzamiento violento y público por parte de los actores.

El TS argumenta en su auto que podría darse dicho alzamiento violento con «la incorporación de un nuevo elemento, concretamente, una movilización ciudadana que exigiera la permanencia del nuevo orden implantado, y que lograra su propósito mostrando una determinación generalizada y explícita, al tiempo que férrea e inflexible ante cualquier otra alternativa». (Auto de 9 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 7º).

Considero errónea la interpretación que da el TS pues, si bien es cierto que la violencia en el delito de rebelión también se considera que procede cuando el empleo de fuerza física constituya una seria amenaza no podemos dar esta situación como probable, pues se basa en meras conjeturas del TS.

El TS también justifica dicho alzamiento violento y público con hechos como «la ocupación organizada de calles por centenares de tractores; incluyendo el bloqueo del edificio de la Delegación del Gobierno de Cataluña; el asedio de edificios pertenecientes a la Administración del Estado; el aislamiento de agentes o de la comisión judicial que

realizó el registro de la Consejería de Economía; el impedimento por numerosos individuos de que se realizara el registro en la entidad Unipost; el asedio de los hoteles donde se alojaban los integrantes de las fuerzas del orden; los cortes de carreteras y barricadas de fuego; las amenazas a los empresarios que prestaran soporte a los servicios del Estado; o algunas de las murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación, haciendo en ocasiones recular a los cuerpos policiales, o forzando a estos a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesaria de otro modo; son una clara y plural expresión de esta violencia. Como lo son también las barricadas que se levantaron para proteger esos mismos centros de votación; o el apedreamiento de algunos vehículos policiales, o incluso la destrucción total y vandálica de varios automóviles de la dotación policial.

Todos estos comportamientos expresan el violento germen que arriesgaba expandirse. [...] No está carente de fundamento la pretensión acusatoria de que los promotores de la independencia podrían haberse servido de estos puntuales focos violentos, y de una movilización decidida y pacífica mucho mayor, para exhibir los movimientos populares como la espoleta de una eventual explosión social que ellos podían modular y, por tanto, como la violencia coactiva para la consecución de sus fines». (Auto de 9 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 9º).

A pesar de que sí se han realizado los actos que el ATS enumera, es de difícil fundamento atribuir dicha violencia a los investigados pues, como han dicho numerosas veces y así se ha constatado en el auto, rechazan los medios violentos.

«Todos los investigados han referido que nunca tuvieron la intención de desarrollar un proceso que englobara actos de violencia». (Auto de 9 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 10º).

Autores como NIEVA FENOLL consideran que además los actos violentos enumerados en el auto «no ha existido en las movilizaciones independentistas, como han reconocido todos los actores internacionales. Sólo se han registrado algunos absurdos desórdenes y muy puntuales daños al patrimonio, pero nada que se asemeje en



absoluto a la violencia propia de una insurrección»<sup>17</sup>. También QUERALT JIMÉNEZ considera que la violencia utilizada por los independentistas no es equiparable a otros delitos de rebelión que se han cometido en el estado español «¿Calificar de rebelde a Forcadell es equiparable a Primo de Rivera, Galán y García Hernández, Franco y su dictadura o Tejero (solo en el siglo XX)?»<sup>18</sup>. Además, el TC se manifestó sobre el grado de violencia que debía tener el delito de rebelión: «la rebelión es la más grave de las acciones delictivas susceptibles de ser realizadas. [...] Por definición, la rebelión se realiza por un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos, con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional». (STC 199/1987, de 16 de diciembre de 1987, FJ 4º).

Respecto a la valoración de la procedencia del *periculum in mora* que como ya hemos dicho anteriormente este se fundamenta en tres riesgos fundamentales, el de fuga, el de ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba y el de reiteración delictiva. El auto, en este caso, la fundamenta dos de ellas, el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva.

Respecto al riesgo de fuga el TS considera que «a mayor relevancia de la acción cuya falta de enjuiciamiento se teme, mayor será el perjuicio que, en caso de materializarse el riesgo de fuga, sufrirían los fines perseguidos por la justicia» (Auto de 9 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 14º).

Sin embargo, como más tarde se reconoce en la sentencia dicho riesgo de fuga «se difumina por haberse presentado cuantas veces han sido citados por el TSJC, así como por este Instructor». (Auto de 9 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 14º).

<sup>17</sup> NIEVA FENOLL, J «No. No procedía la prisión», <http://agendapublica.elperiodico.com/no-no-procedia-la-prision>. [Consultado el día 3 de marzo de 2018].

<sup>18</sup> QUERALT JIMÉNEZ, J J. «Ante el Supremo», <https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171110/ante-el-supremo-joan-j-queralt-forcadell-articulo-el-periodico-6414731> [Consultado el día 8 de abril de 2018].

Frente al riesgo reiteración delictiva el TS opta justificarlo dotando a los investigados, y en concreto a María Carme Forcadell Lluís del liderazgo del proceso independentista.

«Una actuación principal en los hechos que se investigan, tanto por su intervención medular durante todo el largo proceso que contemplamos, como por la intensa repercusión que su propio liderazgo ha tenido en cada uno de estos periodos». (Auto de 9 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 15º).

Como también se ha comentado en el AJCI en el que procede la prisión provisional de los Jordis y este ATS el riesgo de fuga queda difuminado por la presentación voluntaria de los investigados, por lo que se consideraría prueba suficiente para que el TS considerase que no existe fundamento para argumentar el riesgo de fuga.

También en la reiteración delictiva la justificación tratar de calmar el devenir político y frenar la actuación fuera del marco constitucional, sin embargo, y como ya se ha dicho anteriormente, actuar fuera del marco constitucional no supone en sí un delito puesto que «tienen cabida en nuestro ordenamiento constitucional cuantas ideas quieran defenderse». (STC 42/2014, de 25 de marzo de 2014, FJ 4º).

Además con la disolución del parlamento catalán con la aplicación del artículo 155 de la CE se hace todavía más difícil cumplir el riesgo de reiteración delictiva puesto que han perdido el poder institucional que tenían, al menos hasta las elecciones autonómicas del día 21 de diciembre de 2017.

### **3. El encaje de la prisión provisional en el ordenamiento jurídico español**

Se ha considerado de difícil encaje en el ordenamiento jurídico una de las más graves medidas que puede adoptar el Estado respecto a un ciudadano como es la medida cautelar de la prisión provisional. Esta medida cautelar choca principalmente con el derecho fundamental de la libertad recogido en el artículo 17 de la CE. Por lo tanto la medida cautelar de la prisión provisional debe proceder cuando se ajuste a una medida excepcional, subsidiaria, provisional y proporcionada a la consecución de aquellos fines.

Sin embargo, el derecho a la libertad no es el único derecho que puede verse afectado por la prisión provisional, pues la entrada en prisión del investigado cuando todavía es considerado inocente también atentaría contra el derecho fundamental de la presunción de inocencia recogida en el artículo 24.2 de la CE algunos autores como FERRAJOLI llegan hasta a rechazar la prisión preventiva «La prisión sin juicio puede, al menos hasta la conclusión de la primera fase del proceso, ser suprimida. El imputado debe comparecer libre ante sus jueces, no sólo porque así se le asegura su dignidad de ciudadano presuntamente inocente, sino también –diría que sobretodo- por necesidad procesal: para mantener la igualdad de armas con la acusación; para que después del interrogatorio y antes de la audiencia definitiva pueda organizar eficazmente su defensa; para que la acusación no esté en condiciones de determinar el juego, construyendo acusaciones y urdiendo las pruebas a sus espaldas»<sup>19</sup>. Con estas palabras FERRAJOLI considera que la prisión provisional va en contra también del principio procesal de la igualdad de armas.

Volviendo al derecho fundamental de la presunción de inocencia MUÑOZ CONDE considera que «Los “motivos bastantes” (para estimar criminalmente responsable a una persona) no son suficientes para delimitar el principio de presunción de inocencia [...] por muy evidentes y suficientes que sean esos motivos, en ningún caso pueden sustituir ni adelantar los resultados que, tras el juicio oral, se constaten en una sentencia condenatoria firme»<sup>20</sup>. Por lo tanto hemos de considerar que tal medida cautelar no es un adelanto de la pena pues la prisión provisional no tiene las características propias de una pena.

Sin embargo, y según MUÑOZ CONDE, esta limitación todavía sigue siendo una limitación importante del derecho fundamental de libertad recogida en el artículo 17 de la CE por lo que es necesario un segundo principio básico delimitador, surge así el principio de intervención mínima, la cual es «una consecuencia del principio más general del Derecho penal material, el llamado principio de intervención mínima que obliga siempre a elegir el medio menos lesivo posible entre los diversos medios

<sup>19</sup> FERRAJOLI, L. Derecho y razón: teoría del garantismo penal, 8ª ed. Trotta, 2006 p. 559.

<sup>20</sup> MUÑOZ CONDE, F. «Cuestiones teóricas y problemas prácticos de la prisión provisional» *Prisión provisional, detención preventiva y derechos fundamentales: seminario internacional, Toledo, 2 a 5 de octubre de 1996, Sección Española de Intercenter*, 1997, p. 8.

posibles»<sup>21</sup>. Por lo que si existen otros medios para conseguir el mismo fin de carácter menos lesivo se deberá elegir el medio menos lesivo posible, descartando así la prisión provisional.

Respecto al requisito de *periculum in mora* MORESO MATEOS analizando la obra de FERRAJOLI considera que las únicas que tendrían una justificación es el peligro de destrucción de pruebas y el peligro de fuga. Sin embargo «destruye la idea del peligro de fuga con un argumento contundente: los incentivos para la fuga proceden, precisamente, de la existencia de la prisión preventiva, sin ella se desvanecerían en buena medida»<sup>22</sup>. Además considera que es «muy difícil en una sociedad informatizada e internacionalmente integrada como la actual, una fuga definitiva; tal vez bastaría como medio disuasorio una mayor vigilancia del investigado»<sup>23</sup>. Y respecto de la destrucción de las pruebas, «basta una detención de horas o unos pocos días (y podría ser arresto domiciliario) para llevar a cabo la instrucción al respecto y proceder de acuerdo con ella»<sup>24</sup>.

FERRAJOLI concluye diciendo que «la cárcel sin juicio podría eliminarse, al menos hasta la conclusión del juicio en primera instancia»<sup>25</sup>.

#### IV. Acumulación de procesos

##### 1. La problemática de la acumulación de procesos entre aforados y no aforados (conexión material inescindible) en el auto 24 noviembre 2017, Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª).

El último aspecto procesal importante que he considerado abarcar es el tema de la acumulación de procesos que tuvo lugar en el auto del TS de 24 de noviembre de 2017, en esta acumulación el TS pretende que tanto los Jordis como los diputados del

<sup>21</sup> MUÑOZ CONDE, F. «Cuestiones teóricas y problemas prácticos de la prisión provisional» *Prisión provisional, detención preventiva y derechos fundamentales: seminario internacional, Toledo, 2 a 5 de octubre de 1996, Sección Española de Intercenter*, 1997 p. 8.

<sup>22</sup> MORESO MATEOS, J J «La doctrina Ferrajoli y la prisión preventiva», <http://agendapublica.elperiodico.com/la-doctrina-ferrajoli-la-prision-preventiva>. [Consultado el día 24 de enero de 2018].

<sup>23</sup> FERRAJOLI, L. Derecho y razón: teoría del garantismo penal, 8ª ed. Trotta, 2006 p. 559

<sup>24</sup> Op. cit. p. 560.

<sup>25</sup> Op. cit. p. 560.

parlamento de Cataluña sean juzgados ambos en un mismo proceso. El TS argumenta esto mediante la existencia de una conexión objetiva mediante el artículo 17 «el objeto del proceso se configura por una unidad delictiva, con una pluralidad de partícipes». (Auto de 24 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 2º).

Además justifica dicha conexión de una manera muy simple:

«El hecho se ha cometido en coautoría, particularmente cuando, como con la rebelión, el delito tiene un carácter plurisubjetivo, y el Ministerio Fiscal sostiene esa autoría por un reparto de funciones entre diferentes intervinientes, necesariamente impone una valoración conjunta de las actuaciones, pues sólo la suma de lo aportado por cada uno de los comportamientos individuales permite apreciar la significación antijurídica de los hechos, y el procedimiento unificado es el único instrumento con que cuentan los Tribunales para alcanzar una respuesta simultánea y no contradictoria respecto de la existencia de cada elemento del tipo». (Auto de 24 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 2º).

Es cierto que el delito de rebelión tiene un carácter plurisubjetivo, es decir que, una persona no puede cometer el delito de rebelión ella misma si bien necesita varias personas para poder cometer dicho delito.

Pero aparte de la conexión y la posterior acumulación de los procesos también existe otro problema que el TS debe resolver, y es que en esta acumulación de procesos se encuentran investigados de naturaleza no aforada y por ello se «priva a los no aforados del recurso de apelación que tendrían de haber estado sometidos al órgano jurisdiccional ordinario». (Auto de 24 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 3º).

El TS justifica la privación del recurso de apelación argumentando que «la extensión de la competencia sobre los no aforados viene exigida por la naturaleza de los hechos sometidos a proceso y por la aportación parcial que realiza cada uno de los involucrados en ellos, la obligación de la instrucción conjunta persiste» (Auto de 24 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 4º).

El TS también le da soporte legal: «Una agrupación procesal que afecta necesariamente a la competencia y que viene expresamente prevista en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 272 de la LECRIM». (Auto de 24 noviembre 2017, Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 2º).

Sin embargo, como ya se ha dicho anteriormente en este ATS se está privando a los no aforados del recurso de apelación. En dicho aspecto la STEDH caso Cöeme vs Bélgica ha establecido la doctrina de que «el fuero procesal debe limitarse a las personas que ostentan el cargo que lo determina, excluyendo del aforamiento a otros posibles partícipes». (Auto de 10 de septiembre 2012 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 2º).

Nos encontramos aquí entre un conflicto entre «el derecho al Juez predeterminado por Ley y las exigencias de la seguridad jurídica» que «hace necesario que en los supuestos de concurrencia de aforados y no aforados se determine en las incoaciones, con precisión y claridad, el ámbito de la competencia de esta Sala». (Auto de 13 de noviembre 2014 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 2º).

En el auto de 13 de noviembre 2014 el TS ya dijo que el aforamiento tiene un carácter extraordinario y por lo tanto nace la necesidad de no expandirlo:

«Basándose en el carácter extraordinario del privilegio del aforamiento y en el carácter general de las normas de competencia, predica “la necesidad de evitar la expansión de lo excepcional”». (Auto de 10 de septiembre 2012 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal, Sección 1ª, FJ 2º).

Por lo tanto, considero esto no se debería proceder a la acumulación de procesos entre los aforados y los no aforados pues prima antes el derecho de defensa recogido en el artículo 24 de la CE y en el 6.1 de CEDH.

## V. Conclusión

Todas estas cuestiones procesales tratadas en este trabajo de fin de grado no cabe duda que tienen una enorme complejidad y profundidad, pues en todos estos aspectos se han dado argumentos de peso tanto para que proceda la competencia para conocer el delito de sedición por parte de la AN y el JCI como para el acuerdo de prisión provisional de los Jordis y los diputados del parlamento de Cataluña además de darse argumentos favorables para acumulación de procesos entre las personas aforadas y las no aforadas primando así la seguridad jurídica frente al derecho fundamental recogido en el 24 de la CE.

Cabe destacar que en el caso de la competencia de la AN para conocer los delitos de sedición y de rebelión tiene dificultad, pues los estos tipos de delitos contra el orden público y contra la constitución no se encuentran muy activos en nuestro CP y por ello no se encuentran muy desarrollados doctrinalmente. Se han dado argumentos a favor y en contra para que la AN conozca o no conozca los delitos de sedición y de rebelión. Sin embargo, considero que en este caso la AN no hace una buena interpretación del artículo 65 de la LOPJ pues considero que el tribunal competente para conocer dichos delitos no es la AN como la propia AN dijo en su auto de 2 de diciembre de 2008 del JCI número 5.

Respecto de la prisión provisional tanto de los Jordis como de los diputados del parlamento de Cataluña considero se han dado argumentos de peso para que proceda la prisión provisional, a pesar de ello, considero que la entrada a prisión por parte de los Jordis como también de los diputados del parlamento de Cataluña es una medida completamente desproporcionada, pues considero que no se da el elemento de alzamiento público y tumultuario en los delitos de rebelión y de sedición.

Por otro lado, considero que el encaje de la prisión provisional en nuestro ordenamiento jurídico es correcto, sin embargo, y bajo mi parecer, esta medida cautelar debería interpretarse de una manera más estricta. Considero que deberían aparecer en nuestro ordenamiento jurídico medidas alternativas tanto a la entrada en prisión provisional como a la entrada en prisión por motivo de pena, pues no debemos olvidar que actualmente el Estado español es uno de los países de la Unión Europea con la tasa

de criminalidad más baja y, sin embargo, es uno de los países del mundo con la tasa de población penitenciaria más alta.

La cuestión procesal de la acumulación de procesos también ha sido polémica aunque en menor medida, el TS ha preferido que prime la seguridad jurídica frente a al derecho fundamental de un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley regulado en el artículo 24.2 de la CE y el 6.1 de la CEDH ya que se les está privando a las personas no aforadas al derecho del recurso de apelación si siguieran por el proceso ordinario. Considero, sin embargo, que el derecho fundamental recogido en el artículo 24 de la CE debería primar sobre el riesgo de perderse la seguridad jurídica, pues además los procesos con personas aforadas se tratan de unos procesos extraordinarios y por ello no se debería expandir a personas no aforadas.

Con todo ello, he decidido rebatir todas las resoluciones aquí presentadas tanto por el JCI como por el TS, pues a mi juicio no están bien motivadas declarando que la competencia para conocer los delitos de rebelión y sedición no es de la AN, que no procede la prisión provisional tanto de los Jordis como de los diputados del parlamento de Cataluña y que la acumulación de procesos llevados a cabo por el TS supone una indefensión por parte de las personas no aforadas.



## VI. Bibliografía

### 1. Libros consultados.

ÁLVAREZ GARCÍA, F J. *Tratado de derecho penal español. Parte especial. IV, Delitos contra la Constitución* Tirant lo Blanch, 2016.

ARMENTA DEU, T. *Lecciones de derecho procesal penal* 10ª ed. Marcial Pons, 2017.

BOLDOVA PASAMAR, M A ... [et al.]. *Derecho penal. Parte especial: conforme a las leyes orgánicas 1 y 2/2015, de 30 de marzo*, Comares, 2016.

DE LA OLIVA SANTOS, A ... [et al.] *Derecho procesal penal*, 8ª ed. Centro de Estudios Ramón Areces, 2007.

FERRAJOLI, L. *Derecho y razón: teoría del garantismo penal*, 8ª ed. Trotta, 2006.

GUTIÉRREZ DE CABIDIES, P *La prisión provisional (a partir de las leyes 13/2003, de 24 de octubre y 15/2003, de 25 de noviembre*, Aranzadi, 2004.

MUÑOZ CONDE, F. *Derecho penal. Parte especial* 21ª ed. Tirant lo Blanch, 2017.

NIEVA FENOLL, J *Derecho procesal. III, (Proceso penal)*, Marcial Pons, 2017.

### 2. Revistas y artículos jurídicos

COLOMER BEA, D. «Sedición y desórdenes públicos: una propuesta de delimitación (a propósito de la imputación de los Jordis)» *Diario La Ley*, Nº 9145, 2018.

DOPICO GÓMEZ-ALLER, J., « ¿Es competente la Audiencia Nacional para conocer de los delitos de rebelión y de (algunos de) los delitos de sedición? », *Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología*, Nº.19-17, 2017, p. 1-19.

ELÍAS MONDEJA, A «Criminales vs. víctimas (Especial referencia a la Ley Orgánica 13/2015 y la Ley 41/2015, ambas de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal)» *CEFLegal: revista práctica de derecho. Comentarios y casos prácticos*, Nº. 197, 2017 p. 129-166.

MUÑOZ CONDE, F. «Cuestiones teóricas y problemas prácticos de la prisión provisional» *Prisión provisional, detención preventiva y derechos fundamentales: seminario internacional, Toledo, 2 a 5 de octubre de 1996, Sección Española de Intercenter*, 1997, p. 219-230.

PÉREZ MORALES, M G. «Actual regulación de la prisión provisional» *Anales de derecho*, Nº 14, 1996, p. 197-230.

PRIETO SANCHÍS, L. «Prisión provisional y medios de comunicación» *Prisión provisional, detención preventiva y derechos fundamentales: seminario internacional, Toledo, 2 a 5 de octubre de 1996, Sección Española de Intercenter*, 1997, p. 231-245.

SOLER FERRER, F. «Factors en la decisió de la presó provisional. La valoració del jutge instructor» *Justiforum: Papers d'estudis i formació*, N°. 4, 1995, p. 47-54.

### **3. Legislación**

Constitución Española, 1978.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

### **4. Jurisprudencia**

Sentencia 199/1987, de 16 de diciembre de 1987, Tribunal Constitucional. Pleno.

Auto de 2 de diciembre 2008, Juzgado Central de Instrucción (núm. 5).

Auto de 10 de septiembre 2012 Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª).

Sentencia 42/2014, de 25 de marzo de 2014, Tribunal Constitucional. Pleno.

Auto de 13 de noviembre 2014 Tribunal Supremos (Sala de lo Penal, Sección 1ª).

Auto de 27 de septiembre 2017, Juzgado Central de Instrucción (núm. 3).

Auto de 11 octubre 2017, Juzgado Central de Instrucción (núm.3).

Auto de 16 octubre 2017, Juzgado Central de Instrucción (núm.3).

Auto de 9 noviembre 2017, Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª).

Auto de 24 noviembre 2017, Tribunal Supremo (Sala de lo Penal, Sección 1ª).

## 5. Recursos de Internet.

ELBAL SÁNCHEZ, I. «No creo en las casualidades», [https://www.eldiario.es/contrapoder/creo-causalidades\\_6\\_698240178.html](https://www.eldiario.es/contrapoder/creo-causalidades_6_698240178.html). [Consultado el día 30 de enero de 2018].

MORESO MATEOS, J J «La doctrina Ferrajoli y la prisión preventiva», <http://agendapublica.elperiodico.com/la-doctrina-ferrajoli-la-prision-preventiva>. [Consultado el día 24 de enero de 2018].

LLABRÉS FUSTER, A., «Retorçar el Dret», [https://www.arabalears.cat/opinio/Retorcar-Dret\\_0\\_1895210670.html](https://www.arabalears.cat/opinio/Retorcar-Dret_0_1895210670.html), 27 de octubre de 2017; [Consultado el día 1 de marzo de 2018].

NIEVA FENOLL, J. «Prisión Provisional y Contexto Histórico.», <http://agendapublica.elperiodico.com/prision-provisional-contexto-historico> [Consultado el día 24 de enero de 2018].

NIEVA FENOLL, J «No. No procedía la prisión», <http://agendapublica.elperiodico.com/no-no-procedia-la-prision>. [Consultado el día 3 de marzo de 2018].

QUERALT JIMÉNEZ, J J. «Ante el Supremo», <https://www.elperiodico.com/es/opinion/20171110/ante-el-supremo-joan-j-queralt-forcadell-articulo-el-periodico-6414731> [Consultado el día 8 de abril de 2018]

QUERALT JIMÉNEZ, J J. «Els Jordis i la independència judicial», [https://www.elnacional.cat/ca/opinio/joan-queralt-cuixart-sanchez-independencia-judicial\\_203364\\_102.html](https://www.elnacional.cat/ca/opinio/joan-queralt-cuixart-sanchez-independencia-judicial_203364_102.html), 19 de octubre de 2017; [Consultado el día 31 de enero de 2018].